

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022).

Ref. No. 078-2018-00268.

Entradas las presentes diligencias advierte el despacho que es necesario hacer un control de legalidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 132 del Código General del Proceso, conforme a los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

1. Mediante auto de 3 de abril de 2018 se admitió la demanda de referencia de resolución de contrato de compraventa de automotor instaurada por Fernando Alberto Socha Parada en contra de Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila y se ordenó notificar al extremo pasivo en la forma dispuesta en los artículos 291 y 292 del C.G.P. (fl17).
2. Posteriormente, en proveído de 13 de mayo de 2019 se ordenó la citación de los señores Victor Senón Valbuena y Jorge Iván Rojas Valbuena como litisconsortes cuasi-necesarios según lo previsto en el artículo 62 del ordenamiento procesal. (fl. 110).
3. En cuanto al enteramiento de la parte pasiva, se advierte que el 20 de febrero de 2020 la apoderada judicial del demandante aportó un escrito firmado por la señora Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila mediante el cual se allanó a las pretensiones del libelo, documento que cuenta con presentación personal ante la notaría 40 del Circuito de Bogotá. (fl. 150 a 152), motivo por el que en auto de 18 de febrero de 2021 se le tuvo por notificada por conducta concluyente. (fl 156).

II. CONSIDERACIONES

1. Preceptúa el artículo 132 del Código General del Proceso, *“Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.”*

De manera, que el saneamiento constituye un deber del juez que se produce desde el inicio de cualquier proceso o actuación y se manifiesta a través de distintas etapas del procedimiento. Obligación que puede constituir en corregir las irregularidades, decretar nulidades o adoptar cualquier otra medida que permita hacer efectiva la tutela judicial efectiva o que evite un desgaste de la administración de justicia.

2. Conforme a las anteriores precisiones, descendiendo al caso objeto de estudio resulta de carácter imperativo traer a colación lo consagrado en el artículo 301 del Código General del Proceso, en punto de la notificación por conducta concluyente según el cual ésta se configura **“Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma,** o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal.

Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad. Cuando se hubiese reconocido personería antes de admitirse la demanda o de librarse el mandamiento ejecutivo, la parte será notificada por estado de tales providencias.”

En ese entendido, cuando se trata de actuaciones judiciales rige el principio de publicidad, en virtud del cual, las providencias deben ponerse en conocimiento de las partes a través de notificaciones que deberán efectuarse según las formalidades establecidas en la ley adjetiva. Así, el enteramiento del mandamiento de pago o el auto admisorio de la demanda al extremo pasivo del litigio constituye un acto de suma importancia, por cuanto, de éste depende el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, y por ende el debido proceso, que garantiza una adecuada administración de justicia. Sobre el punto la Corte Constitucional en Sentencia T-225 de 2006 precisó:

“Ha sido reiterada jurisprudencia de la Corte, que para garantizar la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, es necesario que las personas que puedan resultar involucradas en procesos judiciales, cualquiera sea su naturaleza, deban ser enteradas acerca de la existencia del proceso mediante la notificación personal de la primera providencia que se profiere en el mismo, bien trátase de auto admisorio de la demanda o bien de mandamiento ejecutivo o de pago. Noticia de la existencia del proceso que debe hacerse en primer lugar, agotando todos los mecanismos dispuestos en la ley para hacerla de manera personal, y sólo en la medida en que no sea posible cumplir con ésta diligencia es pertinente, de manera subsidiaria, recurrir a otras formas dispuestas para el efecto por la ley”

De lo anterior se desprende que con la notificación personal al extremo demandado se posibilita el ejercicio de la defensa como lo estime más conveniente por esta razón las irregularidades que comporte este acto, por no surtirse o emplazarse sin el lleno de los requisitos mínimos, conllevan por disposición expresa del legislador a la configuración de una causal de nulidad. El substrato de estas causales lo encontramos en el principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 superior.

4. Así las cosas, verificado el escrito presentado por la parte actora el 20 de febrero de 2020 en el que la demandada Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila se allanó a las pretensiones de la demanda se advierte que en el mismo no se acreditan los presupuestos procesales antes citados a efectos que se le tuviera por notificada por conducta concluyente, toda vez que, no obra manifestación expresa por parte de la convocada de conocer el auto de fecha 3 de abril de 2018 mediante el cual se admitió la demanda de referencia o siquiera se hace mención a la providencia, de ahí que no resultaba procedente tener en cuenta el enteramiento a la luz de la referida disposición.

Aunado lo anterior, como quiera que el presente asunto corresponde a un trámite de menor cuantía tampoco le estaba dado pronunciarse frente a las pretensiones del libelo introductor actuando en causa propia, por carecer del derecho de postulación según lo previsto en el artículo 73 del estatuto procesal, en tanto que no es abogada inscrita, requisito necesario para actuar, ya que la materia objeto de debate no se encuentra dentro de las excepciones previstas en la ley, artículos 28 y siguientes del Decreto 196 de 1971.

En efecto, el mencionado artículo 28 establece: *«Por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos: 1o. En ejercicio del derecho de petición y de las acciones públicas consagradas por la Constitución y las leyes... 2o. En los procesos de mínima cuantía... 3o. En las diligencias administrativas de conciliación y en los procesos de única instancia en materia laboral... 4o. En los actos de oposición en diligencias judiciales o administrativas, tales como secuestros, entrega o seguridad de bienes, posesión de minas u otros análogos. Pero la actuación judicial posterior a que dé lugar la oposición formulada en el momento de la diligencia deberá ser patrocinada por abogado inscrito, si así lo exige la ley.»*

5. En ese orden ideas, verificado que el contradictorio no se encuentra integrado en debida forma, es menester adoptar una medida de saneamiento a fin de subsanar las irregularidades advertidas, para cual, se dejará sin valor y efecto el inciso primero del auto de 18 de febrero de 2021 mediante el cual se tuvo por notificada a la demandada por conducta concluyente y, en consecuencia, se ordenará al extremo actor realizar las gestiones tendientes al enteramiento en la forma dispuesta en los artículos 291 y 292 del C.G.P., en concordancia con lo normado en el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **RESUELVE:**

PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el inciso 1° del auto de 18 de febrero de 2021 y 16 de marzo de 2021 mediante el cual se tuvo por notificada a la demandada Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila por conducta concluyente, por las razones expuestas.

SEGUNDO: En consecuencia de la invalidez decretada, se requiere a la parte actora a fin de notifique en debida forma a la demandada Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila conforme a los artículos 291 y 292 del C.G.P. en concordancia con lo normado en el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022.

Notifíquese,¹

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal**

¹ Esta providencia se notificó por estado No. 65 de 24 de junio de 2022.

Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c22bae8ac036b6c8c2aa9ba5e784ec438b85e7091f54ba8bf8c41362c99d97fe**

Documento generado en 23/06/2022 12:41:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>